

25476

*ORDEN de 31 de octubre de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 23 de junio de 1975, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido entre «Industrias Metálicas de Navarra», «Huarte y Compañía», don Jesús Ibáñez Ardanaz, don Cirilo Ibáñez Alonso, don Víctor Bregaña Roncal y «Aristu, S. L.», demandantes, y la Administración General del Estado, demandada, contra resoluciones del Ministerio de la Vivienda; la primera, de 12 de diciembre de 1968, por la que se aprobó la modificación de uso, sustituyendo el de la tolerancia industrial por el destino residencial en el polígono «Longabide», sito en el barrio de San Juan, entre las carreteras de San Juan y de Barañain, en Pamplona, denegándose al propio tiempo la aprobación del plan parcial de ordenación urbana del polígono «Longabide» y la segunda, de 10 de octubre de 1969, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la primera; se ha dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con fecha 23 de junio de 1975 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, no dando lugar a la inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado, debemos, estimando en parte el recurso contencioso interpuesto por «Industrias Metálicas de Navarra», «Huarte y Compañía», don Jesús Ibáñez, don Cirilo Ibáñez, don Víctor Bregaña y «Sociedad Aristu», contra los acuerdos del Ministerio de la Vivienda, de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho y de diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, por los que, respectivamente, se acordó la transformación del polígono de «Longabide», y la denegación de la aprobación del plan de tal polígono, y por el segundo se acordó la conformación en lo esencial en reposición de tal acuerdo anterior; debemos declarar y declaramos la nulidad de las actuaciones administrativas, en que se dictaron los acuerdos recurridos, a partir del momento anterior al dictado del primero de los citados acuerdos de doce de diciembre, y por tanto también —y sin entrar a conocer sobre el fondo— la nulidad de dichos acuerdos, reponiendo las actuaciones a tal momento y remitiéndolas al Organismo de quien proceden, reanudando la tramitación se dicte, en sustitución de tales acuerdos, nuevo acuerdo resolutorio en que, reproduciendo lo dispuesto en los dictados, se fijen además de manera concreta y específica las modificaciones que hayan de realizarse en el plan de tal polígono en relación: con las dotaciones comerciales, con la altura de los bloques y con el soleamiento y se notifique a los interesados; y sin que proceda hacer especial declaración sobre las costas de este contencioso.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María Cordero.—Adolfo Suárez.—Enrique Medina.—Fernando Vidal.—José L. Ponce de León.—(Rubricados).

Publicación: Leida y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el excelentísimo señor don Fernando Vidal Gutiérrez, Magistrado Ponente en estos autos, celebrando audiencia pública la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo, de lo que, como Secretario, certifico.—Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco.—Luciano Corujo.—(Rubricado.)»

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la sentencia expresada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 31 de octubre de 1975.—Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Urbanismo.

25477

*ORDEN de 5 de noviembre de 1975 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución.*

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, se resuelve el asunto que se indica:

Ezcaray (Logroño).—Recurso de alzada interpuesto por don José Luis Lacalle Contreras, en su propio nombre y derecho y en el de sus hermanos María Victoria, María Asunción, Pablo y Esther María Lacalle Contreras, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Logroño de 31 de julio de 1973, que aprobó definitivamente el proyecto de alineación de la calle Padre José García, en Ezcaray, a reserva de que se completase el mismo, y

Resultando que el interesado, en su escrito de recurso, solicita se anule la resolución impugnada, formulando las alegaciones que estima oportunas en defensa de su pretensión;

Resultando que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se dio traslado del escrito de recurso al Ayuntamiento de Ezcaray, que se personó en el expediente alegando que el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo es ajustado a derecho y el proyecto recurrido mejora la circulación viaria y su seguridad, y entiendo que no ha existido indefensión del interesado, al tener conocimiento del expediente y de su tramitación;

Resultando que la Dirección General de Urbanismo y la Asesoría Jurídica del Departamento han evacuado sus respectivos informes oportunamente solicitados;

Considerando que el escrito de recurso reúne todas las condiciones adjetivas para su admisibilidad, pues se encuentra interpuesto dentro del plazo de quince días que establece el artículo 219 de la Ley del Suelo para recurrir en alzada contra los actos de la Comisión Provincial de Urbanismo, e interpuesto por persona legitimada para ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo, habiendo acreditado suficientemente la representación ostentada por el recurrente, conforme al artículo 24.2 de la citada Ley, procede entrar a conocer de las cuestiones de fondo planteadas en el escrito de recurso;

Considerando que la Comisión Provincial de Urbanismo, en su sesión de 27 de marzo de 1973, acordó dejar pendiente de resolución el expediente, hasta tanto obraren en el mismo informes de la Delegación de Obras Públicas y del Ayuntamiento, y posteriormente, con fecha 31 de julio de 1973, acordó aprobarlo definitivamente, a reserva de que se complementase su documentación, y el interesado alega infracción del artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no concederse el trámite de audiencia al interesado respecto de estos informes, a cuyo tenor es necesario precisar que del examen del expediente se observa que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley del Suelo, que exige, en su artículo 32, que una vez aprobado inicialmente el plan, se someta a información pública por el plazo de un mes, trámite que se ha cumplido en el presente expediente, y al ser el procedimiento regulado en la Ley del Suelo, uno de los procedimientos especiales que continúan vigentes a la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo, según lo establecido en el Decreto de 10 de octubre de 1958, es por tanto éste el aplicable y no el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; por otra parte, es de tener en cuenta que tanto el informe de Obras Públicas como el del Ayuntamiento, no añaden nada nuevo al expediente inicial, ya que el proyecto aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo no se rectificó como consecuencia de los mismos;

Considerando que, respecto de la alegación del recurrente de que el proyecto carece de los documentos exigidos en el artículo 11 de la Ley del Suelo, por lo que la Comisión Provincial de Urbanismo debió devolverlo para su cumplimentación, con nuevo trámite de información, a lo que hay que añadir la inexistencia de plan general de ordenación en el término municipal, a cuyo tenor es necesario precisar que el proyecto recurrido no puede entenderse como un proyecto de urbanización, ya que contiene claramente elementos de ordenación y tiene su encaje en el llamado planeamiento especial regulado en el artículo 13 y siguientes de la Ley del Suelo, que prevén expresamente la posibilidad de un planeamiento especial que se refiera concretamente a la ordenación de las vías de comunicación, como es el caso que nos ocupa, que pretende establecer la alineación de una calle, que hoy día es carretera del Estado denominada de Haro a Valgañón, mejorando los problemas de circulación que ocasionan estas vías cuando atraviesan el casco urbano, en cuanto a la inexistencia de un planeamiento general, que alega el interesado, tampoco puede tenerse en cuenta, ya que del artículo 13 no se deduce la necesidad del mismo para poder redactar un planeamiento especial, sin perjuicio de que en su día se incluya en el plan general del término;

Considerando que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó la alineación prevista en el planeamiento recurrido, a reserva de que se completase con los correspondientes proyectos para dotación de los servicios urbanísticos y ordenación de la edificación, con delimitación de las superficies particulares afectadas por la alineación y los criterios de valoración de suelo, vuelo y construcciones, para que la ejecución concreta de la alineación y el acceso a las superficies de terreno precisas contengan los pronunciamientos de garantía bastante para el administrado que se vea afectado en sus bienes y derechos; y teniendo en cuenta que si bien se estima por este Departamento ministerial urbanísticamente correcta la alineación prevista, la documentación que exige la Comisión Provincial de Urbanismo no es propia de un proyecto de urbanización, sino que debe ser incluida en el plan especial al que se ha hecho alusión, y por otra parte, como alega el interesado, no puede entenderse que se trata de rectificaciones de escasa importancia, por lo que procede dejar en suspenso el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo hasta que el planeamiento recurrido se complete con la documentación exigida por la misma, debiéndose someter nuevamente a información pública y por último presentarse a la Comisión Provincial de Urbanismo para su sanción definitiva, y en este sentido puede estimarse en parte el recurso formulado por el interesado;

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con el Servicio Central de Recursos y con el informe de la Asesoría Jurídica

del Departamento, acuerda estimar en parte el recurso de alzada formulado por don José Luis Lacalle Contreras, en el sentido de dejar en suspenso la aprobación definitiva otorgada por la Comisión Provincial de Urbanismo, con fecha 31 de julio de 1973; a la alineación de la calle Padre José García, en el término municipal de Ezcaray (Logroño), hasta que el planeamiento quede cumplimentado con la documentación exigida en el acuerdo citado, que, una vez sometido a información pública, deberá presentarse ante la Comisión Provincial de Urbanismo para su sanción definitiva.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del Suelo, significando que contra la resolución transcrita, definitiva en vía administrativa, cabe la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de esta publicación. También cabe, con carácter potestativo y previo al contencioso-administrativo, la interposición del recurso de reposición ante el Ministro de la Vivienda, en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Lo que digo a V. I.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 5 de noviembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, Dancausa de Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Urbanismo.

**25478** *ORDEN de 8 de noviembre de 1975 por la que se acuerda el cambio del sistema expropiatorio por el de compensación mixta en el polígono «Aeropuerto», de Sevilla, en las zonas que se indican y con sujeción a los criterios que se señalan.*

Ilmos. Sres.: Visto el expediente elevado por el Instituto Nacional de Urbanización, sobre el cambio del sistema de expropiación por el de compensación mixta en el polígono «Aeropuerto», de Sevilla;

Resultando que por Decreto de 24 de julio de 1969 se aprobó la delimitación del polígono «Aeropuerto», de Sevilla, y que los justiprecios individualizados de los bienes y derechos afectados se aprobaron por Orden ministerial de 30 de julio de 1975, en la que al mismo tiempo se dispone que podrá «cambiarse el sistema de actuación por el de compensación total o parcial, caso de llegarse a un acuerdo de colaboración con los afectados»;

Resultando que muchos de los propietarios interesados han expresado, en diversos momentos del expediente, sus propósitos de incorporarse a la labor urbanizadora, y que también han aceptado los criterios de colaboración propuestos por el Instituto Nacional de Urbanización, en los términos que figuran en el expediente, que pueden sintetizarse así:

a) Se creará una Junta Mixta de Compensación para cada zona o terrenos comprendidos en cada uno de los proyectos de planes parciales números 1, 2, 3 y 4; en cada Junta Mixta corresponderá al Instituto Nacional de Urbanización y al Instituto Nacional de la Vivienda, en la proporción que entre estos Organismos se establezca, el 25 por 100 del capital inicial y sus ampliaciones, y además los Organos del Ministerio tendrán en todo caso representación mayoritaria absoluta en los Organos de gobierno de cada Junta Mixta, y el Consejo Rector de todas ellas estará presidido por el Director-Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.

b) La urbanización primaria y la total del Centro cívico y comercial será realizada por las cuatro Juntas Mixtas, bien agrupadas, ya asociadas formando una Junta general del polígono.

c) Los propietarios que se incorporen a cualquiera de las Juntas Mixtas de Compensación que podrán constituirse, de acuerdo con las bases o criterios inicialmente acordados.

Resultando que ya han aceptado el cambio de sistema y las bases o criterios para la adopción del de compensación mixta, propietarios que representan más del 60 por 100 de la propiedad de los terrenos de cada uno de los cuatro planes parciales proyectados, y que el Instituto Nacional de Urbanización ha redactado los proyectos de Estatutos de cada una de las Juntas Mixtas de Compensación que podrían constituirse, de acuerdo con las bases o criterios inicialmente acordados.

Considerando que según el artículo 4.º de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana «la gestión pública susci-

tará, en la medida más amplia posible, la iniciativa privada y la sustituirá, cuando ésta no alcanzare a cumplir los objetivos de expropiación»;

Considerando que, de acuerdo con los principios indicados en el considerando anterior, ya la Orden ministerial de 30 de julio de 1975 previó la posibilidad de cambiar el sistema de expropiación por el de compensación, en caso de llegarse a un acuerdo de colaboración con los afectados, acuerdo que se ha alcanzado con propietarios que representan más del 60 por 100 de la superficie total de los terrenos afectados por los proyectos de planes parciales números 1, 2, 3 y 4 y por el Centro cívico y comercial, por lo que resulta procedente el cambio de sistema de actuación propuesto;

Considerando que la finalidad pretendida al crear el polígono queda salvaguardada con la intervención que en las Juntas Mixtas, se reserva al Instituto Nacional de Urbanización y, en su caso, al Instituto Nacional de la Vivienda, que no sólo participarán con el 25 por 100 en la inversión exigida por el polígono, sino que además tendrán representación mayoritaria en los Organos de gobierno de las citadas Juntas Mixtas,

Este Ministerio acuerda el cambio de sistema expropiatorio por el de compensación mixta en el polígono «Aeropuerto», de Sevilla, en las zonas o terrenos comprendidos en los proyectos de planes parciales números 1, 2, 3 y 4 y en el Centro cívico y comercial, con sujeción a las bases o criterios establecidos por el Instituto Nacional de Urbanización, a cuyo efecto deberán constituirse las Juntas Mixtas de Compensación propuestas, cuyos proyectos de Estatutos también se declaran aprobados.

Lo que digo a VV. II.

Dios guarde a VV. II.

Madrid, 8 de noviembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, Dancausa de Miguel.

Ilmos. Sres. Director general de Urbanismo y Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.

**25479** *ORDEN de 18 de noviembre de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 27 de junio de 1975 dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia entre don Fernando Quiñones Chozas, demandante, representado por el Procurador señor Aguilar Galiana, bajo la dirección de Letrado, y la Administración Pública, demandada, y en su nombre el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de la Vivienda de 12 de diciembre de 1972, sobre sanción de multa y reintegro de cantidad, se ha dictado el 27 de junio de 1975 sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que estimando en parte la demanda deducida en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Quiñones Chozas contra la resolución del Ministerio de la Vivienda de doce de diciembre de mil novecientos setenta y dos, que estimando en parte el recurso de alzada promovido contra la Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda de veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y dos, confirmó la multa de cinco mil pesetas impuesta al recurrente en expediente sancionador ciento setenta y siete/setenta y uno y acordó la obligación de reintegrar la cantidad que como indebidamente percibida se concretara en período de ejecución, debemos declarar y declaramos que la Resolución ministerial recurrida no es conforme a derecho en cuanto que no dispone la devolución de la cantidad depositada para dicho reintegro, por lo que debemos ordenar y ordenamos quede adicionada con ese concreto extremo y la devolución al actor de las cincuenta y una mil cuatrocientas treinta y cuatro pesetas depositadas con tal finalidad, desestimando las restantes peticiones formuladas en la demanda; sin hacer imposición de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María Cordero.—Fernando Vidal.—José L. Ponce.—Manuel Gordillo.—Félix F. Tejedor.—(Rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de noviembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, Dancausa de Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de la Vivienda.